DOS MINUTOS DE DOCTRINA

4 de marzo de 2016

PEQUEÑA DISTRACCIÓN

Durante un proceso de quiebra, se devolvieron algunos fondos al fallido. Algunos acreedores se sintieron perjudicados y cuestionaron la decisión.

María Marcela Rizzo quebró. Después de numerosas vicisitudes que no vienen al caso, y una vez que todos sus bienes fueron vendidos, el síndico de la quiebra presentó un proyecto de distribución de los fondos obtenidos entre los acreedores.

Según ordena la ley, diez días después de la última venta, el síndico debe presentar un informe en el que, además de rendir cuentas de todas las operaciones efectuadas durante la liquidación del patrimonio del deudor, debe detallar los precios obtenidos, el listado de los bienes que no pudieron venderse y los créditos que no pudieron cobrarse. Sobre esa base, propone la distribución de los fondos.

La ley también dispone que el fallido (esto es, la persona cuya quiebra ha sido declarada por el juez) queda inhabilitado: es desapoderado de todos los bienes que tenía a la fecha de la quiebra y se le prohíbe disponer de ellos y administrarlos.

Cuando es una persona física, (como fue el caso de María Marcela), tampoco puede ejercer el comercio, ser gerente o director de empresas ni constituir nuevas sociedades. Sólo puede desarrollar tareas artesanales, ejercer su profesión o trabajar bajo relación de dependencia.

Para las personas físicas, la inhabilitación dura un año desde que la quiebra es decretada. El plazo puede reducirse si se demuestra que el fallido no incurrió en delitos penales.

Como se ve, las sanciones contra el fallido son duras.

Obviamente, levantada la inhabilitación, el fallido recupera su plena capacidad legal (excepto en el caso de las sociedades, cuya inhabilitación, salvo excepciones, es para siempre).

En el caso de María Marcela el síndico cometió un error e incluyó, en el proyecto de distribución de fondos entre los acreedores, algunos fondos que ella había recibido *luego de levantada su inhabilitación*.

El proyecto fue aprobado y la distribución se llevó a cabo de acuerdo con lo propuesto por el síndico.

Advertido el error, el juez de la quiebra ordenó al síndico y al abogado de María Marcela (*y no a los acreedores beneficiados con la distribución*) que esos fondos le fueran restituidos.

Pero la decisión fue apelada tanto por el síndico y el abogado como por la propia María Marcela.

La Cámara¹ rechazó la apelación, y lo hizo sobre la base de dos argumentos distintos.

El primero de ellos lo fundó en el hecho de que, en su momento, el proyecto de distribución de fondos había sido aprobado y, en consecuencia, *había cosa juzgada sobre él*.

El artículo 218 de la ley de quiebras contiene reglas que permiten a quienes tienen objeciones contra el proyecto de distribución, plantearlas ante el juez si creen necesario impedir pagos indebidos.

María Marcela no siguió ese procedimiento, y a pesar de que contó con un lapso prolongado para objetar la distribución, no lo hizo. (No creemos que haya sido un error de María Marcela, sino quizás de algún profesional que no tuvo en cuenta algún plazo procesal).

La Cámara reconoció que la quebrada, alguna vez, en el marco de los pedidos de levantamiento de su inhabilitación que presentó, había solicitado que se le devolviera el dinero, pero que nunca formuló una solicitud expresa al respecto. Los jueces entendieron que esos pedidos habían sido “autónomos” y habían estado “vinculados expresamente al levantamiento de la inhabilitación”, *pero no constituyeron una observación formal en el marco del artículo 218 citado*.

El segundo argumento de la Cámara fue bastante más original. Se fundó en las llamadas “obligaciones naturales”: esto es, en esas deudas que no dan derecho al acreedor a exigir su pago.

El viejo Código Civil de 1869 las definía como las obligaciones que están “fundadas en el derecho natural y en la equidad” y que no otorgan acción para exigir su cumplimiento. Muchas promesas de amor son “obligaciones naturales”...

La Cámara hizo una interesante y original conexión entre las obligaciones naturales y ciertos aspectos del derecho de quiebras. Según los magistrados, cuando los fondos generados por la venta de los bienes del fallido no alcanzan para satisfacer a todos los acreedores, *eso no extingue la obligación de pagar el saldo impago*.

“Lo que se extingue es la posibilidad de accionar sobre los bienes del deudor” —embargándolos en el marco de un pleito, por ejemplo— “pero la deuda remanente” —lo que los jueces llamaron *el saldo insoluto*— “se equipara con las obligaciones naturales”.

En otras palabras, si los fondos generados por la venta de los bienes del deudor no alcanzan para pagar todas sus deudas, *el deudor sigue debiendo*, pero sus acreedores no podrán demandarlo judicialmente.

En términos jurídicos, *la insuficiencia de fondos no constituye per se un modo de extinción de las obligaciones*. (De lo contrario, cualquier deudor podría, muy suelto de cuerpo, decir “no tengo fondos” y así cancelar sus obligaciones).

Una característica de las obligaciones naturales es que si el deudor de una de ellas hace algún pago, *el acreedor puede retener lo recibido*. El principio está ahora expuesto en el artículo 728 del nuevo Código Civil y Comercial: “lo entregado en cumplimiento de deberes morales o de conciencia es irrepetible”.

¹ In re “Rizzo”, CNCom (C), 2015; expie. 24121/2011/CA2-CA3.

En el caso de María Marcela, los jueces entendieron que las deudas que ella mantenía con sus acreedores (a raíz de no haber podido cancelarlas a través de la venta de todos sus bienes) se habían convertido en obligaciones naturales. Esos acreedores, entonces, *no podían exigir su cumplimiento*.

Pero el hecho de que, por la razón que fuere, esos acreedores recibieron fondos de María Marcela en cancelación de deudas que ya no existían como tales, pues se habían convertido en obligaciones naturales, *hizo que ella no pudiera exigir la devolución de lo pagado y dio derecho a sus acreedores a quedarse con los fondos recibidos*.

Los dos argumentos expuestos por la Cámara se funden en uno solo: la ley de quiebras prevé un mecanismo para distribuir los fondos del quebrado entre sus acreedores. Y prevé también un procedimiento para detener esos pagos cuando hay errores. La fallida debió haber usado ese procedimiento y no lo hizo. En

consecuencia, *consintió implícitamente* los pagos efectuados, *y no pudo pedir que se le devolviera lo pagado* (porque consistió en el pago de obligaciones naturales).

Por lo tanto, la Cámara entendió que si María Marcela no podía pedir a sus acreedores la devolución del dinero, menos podía hacerlo con el síndico y su abogado.

En consecuencia, el tribunal rechazó lo resuelto en primera instancia; los acreedores quedaron encantados al haber recibido dinero de más y el síndico y el abogado respiraron aliviados al no tener que poner dinero de su bolsillo.

Sólo perdió María Marcela, que debe haber observado desolada como la quiebra “aspiraba” fondos que ella podría haber utilizado para rehabilitar su vida mercantil.

La ley es dura, pero es la ley. Y hay errores cuyas consecuencias no las pagan quienes los cometen.

* * *

Esta nota ha sido preparada por Juan Javier Negri. Para más información sobre este tema pueden comunicarse con el teléfono (54-11) 5556-8000 o por correo electrónico a np@negri.com.ar.

**Este artículo es un servicio de Negri & Pueyrredon Abogados a sus clientes y amigos.
No tiene por objeto prestar asesoramiento legal sobre tema alguno.**